



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, febrero diez (10) de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA:	SENTENCIA
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	MARÍA MARLENY MUÑETÓN SANTA
DEMANDADO:	COLPENSIONES
RADICADO:	0050013105 018 2019 00472
ACTA N°:	06

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **MARÍA MARLENY MUÑETÓN SANTA** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** para pronunciarse en virtud del recurso de apelación interpuesto por **COLPENSIONES** y en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad frente a la sentencia con la cual el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 06** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

Se pretende con este proceso básicamente, que se condene a pagar retroactivo de pensión de invalidez a partir de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, esto es, **desde el 18 de septiembre de 2014** hasta el **30 de abril de 2017**, intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o subsidiariamente la Indexación; lo que *ultra y extra petita* resulte probado y costas.

Para sustentar sus pretensiones afirmó, en síntesis: **i)** Fue calificada mediante concepto No. 57390 el 23 de diciembre de 2015 por la JUNTA REGIONAL DE

¹ Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **págs. 2 al 11**”

CALIFICACIÓN DE ANTIOQUIA con una PCL del 56.30% estructurada el **18 de septiembre de 2014**. **ii)** El 25 de abril de 2016 presentó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, siéndole reconocida a través de la Resolución SUB 56315 de mayo 09 de 2017 a partir del **01 de mayo de 2017** en cuantía de \$737.717 sin tener en cuenta el certificado de incapacidades expedido por la EPS SURA en el que se indicaba que recibió los subsidios económicos hasta el 24 de agosto de 2012. **iii)** Solicitó el 02 de marzo de 2018 el pago del retroactivo pensional, pero fue negado con Resolución SUB 137107 del 23 de mayo de 2018, presentándose recursos de ley, siendo resueltos de manera desfavorable a través de las Resoluciones SUB 180726 y DIR del 06 y 18 de julio de 2018.

2. CONTESTACIÓN COLPENSIONES²

La administradora del régimen de prima media se opuso a las pretensiones por carecer de fundamentación fáctica y legal toda vez que la señora Muñetón Santa no allegó certificado de incapacidades médicas. Propuso excepciones denominadas INCOMPATIBILIDAD DE PERCEPCIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL Y PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRESCRIPCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y COMPENSACIÓN.

3. SENTENCIA

Mediante sentencia del **22 de febrero de 2021** la **JUEZ DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN** tomó las siguientes decisiones³: **i) CONDENÓ** a COLPENSIONES al reconocimiento y pago del **retroactivo de la pensión de invalidez** a favor de la Señora MARIA MARLENY MUÑETON SANTA por la suma de **\$23.019.200** liquidado entre el **18 de septiembre de 2014 al 30 de abril de 2017**, a razón de 13 mesadas pensionales anuales; autorizando a la Entidad a efectuar los descuentos con destino a la Seguridad Social en salud. **ii) CONDENÓ** a COLPENSIONES a efectuar el reconocimiento y pago de los intereses de moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el **26 de agosto de 2016**, debiéndose liquidar por la Entidad al momento de efectuar el pago a la tasa máxima del interés moratorio para ese momento. **iii) DECLARA** improbada la excepción de prescripción y **iv) CONDENÓ** en costas a Colpensiones.

² Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, **págs. 69 al 73**"

³ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo "08VideoDeAudiencia" y "09ActaDeAudienciaArticulos77y80"

4. RECURSO DE APELACIÓN COLPENSIONES

La apoderada de la entidad cuestiona la decisión de condenar a **intereses moratorios** argumentando básicamente: Los intereses no son de aplicación automática (cita la sentencia CSJ 43602 del 06 de noviembre de 2013). La Entidad reconoció la pensión a corte de nómina porque no contaba con el documento idóneo para verificar si la demandante recibía o no subsidio por incapacidad. La entidad advirtió que, si bien la parte actora desde la reclamación administrativa aportó certificación de las incapacidades, no pudo tenerse como prueba veraz porque no cumplía con todos los requisitos de validez al no contar con sello de la Entidad o firma del empleado, lo que impidió el reconocimiento de la prestación económica desde la fecha de estructuración. Argumenta que solamente se allega tal documento a través del Juzgado en virtud del oficio.

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia⁴, intervino **COLPENSIONES**⁵ en los cuales reitera lo dicho en su recurso de apelación, insistiendo que se **revoque** la condena impuesta por intereses moratorios al no haberse demostrado en el proceso administrativo hasta cuando fueron reconocidas las incapacidades razón por la cual la Entidad reconoce la prestación a corte de nómina.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación interpuesto y en grado jurisdiccional de **CONSULTA** lo que impone abordar los siguientes problemas jurídicos: **i)** Se analizará si resulta ajustado a nuestro ordenamiento el condenar al reconocimiento del retroactivo pensional causado entre el **18 de septiembre del 2014** y el **30 de abril del 2017** y **ii)** Se verificará la procedencia de la condena a **intereses moratorios**.

6. LA SEÑORA MARÍA MARLENY MUÑETÓN SANTA TIENE DERECHO AL RETROACTIVO PENSIONAL CAUSADO ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DE 2017

⁴ Carpeta nombrada "02SegundaInstancia" Archivo PDF titulado "03AutoAdmiteCorreTraslado"

⁵ Carpeta nombrada "02SegundaInstancia" Archivo PDF titulado "06AlegatosColpensiones"

Para condenar al retroactivo pensional que constituye la pretensión principal de este proceso, la Juez de instancia razonó de este modo: **i)** Invocó el inciso final del artículo 40 y el artículo 31 de la Ley 100, el artículo 10 del Decreto 758 de 1990 y el artículo 3 del Decreto 917 de 1999 así como las sentencias de la Sala de Casación Laboral SL1562-2019 y SL2991-2020, para señalar que la entidad erró al no reconocer la prestación desde la fecha de estructuración de la invalidez y que si en gracia de discusión se aceptara la existencia de la restricción por la posibilidad de aplicar el Decreto derogado por virtud del artículo 31 de la L. 100/93, lo cierto es que a la demandante no le correspondía allegar la prueba del último subsidio pagado invocando el artículo 8º de la L. 100/93, para argumentar que en tanto la prestación económica es reconocida por la EPS ello exige una actividad coordinada de las dos entidades porque los trámites administrativos no pueden ser desplazados al asegurado cuando entre ellas cuentan con la información y medios que permiten desentrañar los puntos que requieren para el reconocimiento o no de las prestaciones a su cargo. **ii)** Así, valora el contenido de los actos administrativos con los que se niega el retroactivo solicitado (Resolución SUB 56315 del 09 de mayo de 2017, Resolución SUB137107 del 23 de mayo de 2018 y Resolución DIR 13206 del 18 de julio de 2018) Para resaltar que en ellos se indicó que reposa en el expediente certificado de incapacidades expedido por la EPS SURA del 01 de abril de 2016 en el que se desprende que el último pago de incapacidades se dio el 24 de agosto de 2012, pero por no contar con sello ni firma de funcionario no se tuvo en cuenta, decidiendo reconocer la prestación con corte a nómina, con lo que se “evidencia la entidad impuso una carga administrativa a la pensionada que no tenía por qué soportar, porque como se dijo, tratándose de una participante del sistema debía reconocer o por lo menos ella misma al momento de decidir la causación de la prestación económica recaudar la información en ese sentido y no solo abstenerse de efectuar el reconocimiento a partir de la fecha de estructuración de la prestación económica, regla general que debe aplicar cuando no cuenta con la certeza de la existencia de las incapacidades”. **iii)** No encontró acreditada la prescripción de mesada alguna atendiendo a las fechas en que se emitieron los actos administrativos con los que reconoció la Pensión de Invalidez y resolvieron los recursos, con la de presentación de la demanda el 13 de agosto de 2019.

Pues bien, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del retroactivo pensional de la pensión de invalidez, debe señalarse en primer término que el **artículo 40** de la ley **100 de 1993** en su último inciso establece:

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.

Y el **artículo 41 en el inciso 5** dispone respecto al pago de las incapacidades que:

Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, **la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador** (resalto intencional de la Sala)

A su vez, para lo pertinente se hace preciso invocar lo establecido en el **Artículo 3° del decreto 917 de 1999**, el cual indica

ARTÍCULO 3o. FECHA DE ESTRUCTURACIÓN O DECLARATORIA DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. **En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.** (resalto intencional de la Sala)

Ahora la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia **SL1562-2019** estudiando los artículos de las normas antes transcritas en cuanto al reconocimiento de la pensión de invalidez y la compatibilidad del subsidio de incapacidad y la pensión de invalidez indicó:

Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración.

Por tanto, ese estado de invalidez igual o superior al 50%, previamente determinado por el organismo médico competente, no puede entenderse disminuido o extinguido por el hecho de que el afiliado hubiese percibido pagos por concepto de incapacidades temporales, pues estos pagos no redundan en la disminución de la invalidez, cuyo amparo es el objetivo principal del derecho pensional.

De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a

la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.

Posteriormente, en sentencia **SL 5170 del 2021** la Alta Corporación rectificó la línea indicando que cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzara a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad; postura que no comparte esta Sala de Decisión al encontrar que con tal interpretación se desconoce el derecho del afiliado a percibir la prestación económica que cubre la contingencia de la invalidez **desde la fecha estructuración** conforme el precepto legal que regula tal derecho. Así, dada la incompatibilidad de las prestaciones en comento, lo procedente es **reconocer el retroactivo** sin perjuicio de que **se descuente lo efectivamente percibido por concepto de auxilio o subsidio por incapacidad**.

Pues bien, a partir de las anteriores premisas, encuentra esta corporación que en el proceso no es objeto de discusión lo siguiente:

- La **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** emitió Dictamen N° 57390 en **diciembre 23 de 2015** determinando una Pérdida de la Capacidad Laboral de 56,3%, origen común y Fecha de Estructuración **18 de septiembre de 2014** según los criterios establecidos en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez adoptado por el **Decreto 1507 de 2014**, el cual fue notificado el **04 de febrero de 2016**⁶. Este acto administrativo fue confirmado con las Resoluciones SUB 212278 del 29 de septiembre de 2017 y DIR 18017 del 13 de octubre de 2017 que resolvieron los recursos de reposición y apelación⁷.
- Ante la solicitud de pensión de invalidez presentada por la afiliada MUÑETÓN SANTA el **25 de abril de 2016**⁸, COLPENSIONES emite la Resolución **SUB 56315 del 09 de mayo de 2017**⁹ en la que **reconoce la prestación a corte de nómina** presentando el siguiente argumento:

⁶ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, **págs. 13 al 20**"

⁷ Así se indica en la Resolución **SUB 137107 del 23 de mayo de 2018**

⁸ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, **pág. 22**"

⁹ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, **págs. 22 a 28**"

Que en virtud de lo dispuesto anteriormente, la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, mediante Circular 01 de 2012, señalaron que las pensiones de invalidez deben reconocerse a partir de la fecha de estructuración de la misma, excepto que con posterioridad a esa fecha, el afiliado se encuentre disfrutando de subsidio por incapacidad, caso en el cual la efectividad será al día siguiente del último pago de dicha incapacidad.

Que obra en el expediente certificación de incapacidades efectivamente pagas al pensionado, expedida por la SURA EPES, de fecha 1 de abril de 2016, en la cual se observa que el último pago de incapacidades se dio el 24 de agosto de 2012, pero el mismo no cuenta ni con sello ni firma de funcionario alguno, razón por la cual no es procedente tenerlo en cuenta y se procede a reconocer la prestación a corte de nómina.

- El **2 de marzo de 2018** se solicita nuevo estudio del derecho al retroactivo de la pensión, insistiendo en que el retroactivo se debe pagar desde el **18 de septiembre de 2014** señalando que el último pago de subsidios económicos por parte de la EPS SURA fue del **15 de julio de 2013** invocando los **artículos 31 de la Ley 100** y el **artículo 10 del Decreto 758 de 1990**¹⁰.
- Es así como COLPENSIONES mediante Resolución **SUB 137107 del 23 de mayo de 2018**¹¹ y para negar el retroactivo luego de invocar el artículo 10 del Decreto 758 de 1990 y Circular 01 de 2012 de COLPENSIONES, para argumentar: **i)** Que no se encuentra dentro del expediente pensional certificado actualizado emitido por la EPS en el cual se constate el último período cancelado por concepto de auxilio por incapacidad temporal o en el que se indique expresamente que el solicitante nunca recibió dinero alguno por ese concepto. **ii)** Que el solicitante allegó certificación calendada **el 17 de enero de 2018** sin embargo el documento no puede ser tenido en cuenta porque no se encuentra firmado en debida forma. Transcribe el artículo 244 del Código General del Proceso. **iii)** Agrega que el revisado el documento en mención no se tiene certeza de que haya sido expedido por un funcionario activo de la EPS SURA, hecho que genera duda y lleva a no tener como auténtico lo consignado en el mismo. **iv)** Aclara que no se discute la autenticidad por ser una copia, sino que el problema radica en que la entidad no tiene certeza sobre la persona que expide la certificación. **v)** Finalmente, remite a lo previsto en el concepto BZ_2016_5976661 del 10 de junio de 2016 emitido por la Subdirección Nacional de Doctrina, sobre la validez de los certificados de incapacidad descargados de Internet, transcribiendo los siguientes apartes:

¹⁰ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, págs. 29 a 31"

¹¹ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, págs. 33 a 38"

“...Los certificados de incapacidades descargados de portales de internet y que son aportados por los ciudadanos para tramitar el pago de incapacidades o como medio probatorio para solicitudes de prestaciones económicas, serán válidos sí y solo sí, se presentan en sobre sellado y suscrito por el funcionario competente, de tal forma que de ellos se desprenda su autenticidad, integridad, confiabilidad e inalterabilidad, lo cual a la postre permitirá darles valor probatorio. Lo anterior, estará sujeto, si es del caso, a la verificación correspondiente, y con ello determinar quién es su autor, es decir, quien se compromete jurídicamente.

Para estos efectos, la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano deberá instruir a los funcionarios encargados de la radicación en los PAC para que digitalicen en debida forma la documentación que les sea entregada en sobre sellado, es decir, que junto con los documentos contenidos en el sobre, digitalicen la superficie de los mismos, especialmente aquellas secciones en las que se incluya la firma y el sello del funcionario que lo remitió.”

- Contra este acto administrativo se interpusieron los recursos de reposición y apelación, argumentando que con la solicitud del pago de retroactivo pensional se acompañó certificado original de incapacidades expedido por la EPS SURA el 17 de enero de 2018 firmado por el funcionario competente y con el sello de SURA; señalando que no se puede dudar de su contenido violando de esta forma el principio constitucional de BUENA FE que le otorga el artículo 83 de la Constitución Política a todos los ciudadanos. Y agrega que **si al entidad tiene dudas sobre el documento presentado está facultada por la Ley 100 y la Ley 019 de 2012 para investigar la veracidad de los documentos en vez de negar la prestación a la que tiene derecho¹².**
- Pero COLPENSIONES emite las Resoluciones **SUB 180726 del 6 de julio de 2018¹³** y **DIR 13206 del 18 de julio del 2018¹⁴** confirmando la negativa al reconocimiento del retroactivo pensional con los mismos argumentos, señalando en la última de ellas:

Que verificado el expediente pensional se evidencia certificación de incapacidades de fecha 17 de enero de 2018, por parte de SURA EPS, en la que obra fecha de ultima incapacidad liquidada mas no pagada.

Por lo anterior se solicitó a la señora **MUÑETON SANTA MARIA MARLENY**, ya identificada mediante oficio **BZ2018_2534161-109447** de fecha 13 de abril de 2018 *“certificado de incapacidades expedido por la eps dentro del cual deberá informarse la fecha de la última incapacidad efectivamente pagada a favor del afiliado de mismo modo, es preciso señalar que el certificado deberá contener el nombre, firma y sello del funcionario competente que lo expide”*. Con guía No GA87020906310 entregado el 16 de abril de 2018.

Por lo anterior a la fecha no se ha allegado certificación alguna por lo que se le informa a la peticionaria que una vez se allegue la certificación de incapacidad con los respectivos requisitos de ley se procederá a decidir conforme a Derecho.

¹² Carpeta “01PrimeraInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **págs. 39 a 43**

¹³ Carpeta “01PrimeraInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **págs. 44 a 49**

¹⁴ Carpeta “01PrimeraInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **págs. 50 a 54”**

- Ahora bien, en el plenario obran sendos certificados de la EPS SURA sobre las incapacidades de la demandante, y en todas ellas se observa que el último pago de la prestación económica se presentó **el 24 de agosto de 2012, con anterioridad a la fecha de estructuración:**
 - Con la demanda se aportó copia de la certificación emitida por EPS SURA el **17 de enero de 2018**, la misma que fue aportada con la solicitud del 2 de marzo de 2018. Aparece al final como remitente PRESTACIONES ECONÓMICAS, transcriptor DIANA PATRICIA GOMEZ HENAO **y se observa un sello de EPS SURA y una firma**¹⁵. Y **certificación del 03 de febrero de 2019**¹⁶ con el escrito de la misma fecha remitido a la señora MUÑETÓN SANTA como repuesta a la solicitud de historial de incapacidades. Aparece al final como remitente PRESTACIONES ECONÓMICAS, transcriptor YESENIA ANDREA VILLA ZAPATA*APRENDIZ REG MED
 - Y al proceso fue remitida certificación fechada el **14 de diciembre de 2019**. Aparece al final como remitente PRESTACIONES ECONÓMICAS, transcriptor YESENIA ANDREA VILLA ZAPATA¹⁷

Efectuada la valoración del acervo probatorio a la luz de lo previsto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo**, en criterio de la Sala en este caso se acreditan los presupuestos para condenar al retroactivo pensional en los términos ordenados en la sentencia: **i)** Porque la entidad debió efectuar el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del **18 de septiembre de 2014**, que es la fecha de estructuración de la invalidez definida en el Dictamen N° 57390 emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA desde el 23 de diciembre de 2015. **ii)** Se resalta, que reposan sendos certificados de la EPS SURA del **17 de enero de 2018, 03 de febrero de 2019 y 14 de diciembre de 2019** con los que se corrobora que no se reconoció subsidio por incapacidad temporal a la demandante con posterioridad al 24 de agosto de 2012. **iii)** Pero si lo anterior fuera poco, se acredita en el plenario que en el acto administrativo **SUB 56315 del 09 de mayo de 2017** se reconoce por la administradora de pensiones la existencia de un certificado expedido por SURA EPS desde el **1 de abril de 2016** con el que se acreditó que el último pago de incapacidades había sido hasta el 24 de agosto de 2012. **iii)** La Sala comparte los planteamientos esbozados en la providencia así como por la activa en el trámite

¹⁵ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, págs. 56 - 57"

¹⁶ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, págs. 59 al 60 y 104 a 106"

¹⁷ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01ExpedienteDigitalizado, págs. 104 a 106"

administrativo; porque se observa una negativa injustificada del reconocimiento de la prestación desde la fecha de estructuración a pesar de tener derecho a ello, presentando argumentos referidos a trámites administrativos que en manera alguna son oponibles a la afiliada. El principio constitucional de la eficiencia (**artículo 48** de la Carta Política) desarrollado en el **artículo 2 de la Ley 100 de 1993** implica de las entidades administradoras de la seguridad social la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. No puede perderse de vista que el sistema de seguridad social constituye una garantía irrenunciable predicable de todos los habitantes del territorio nacional así como un servicio público de carácter obligatorio y en cumplimiento del mandato constitucional, se estructura con el objetivo de procurar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la protección de las principales contingencias que los afectan, entre ellas la invalidez que afecta claramente los ingresos de los afiliados que padecen tal condición. **iv)** Es así como resulta claramente contraria a derecho la negativa al reconocimiento de los derechos pensionales sustentando el argumento en trámites administrativos que se constituyen en barreras para acceder a las prestaciones como el invocado en la Resolución **SUB 56315** del **09 de mayo de 2017**, haciendo referencia un concepto emitido por la Subdirección Nacional de Doctrina sobre las instrucciones que se deben emitir a los funcionarios de la entidad que reciben la documentación referida a los certificados de incapacidad. **iv)** Así, si aun contando en su poder con certificados aportados por la activa fechados el **1 de abril de 2016** y del **17 de enero de 2018** y a pesar de la presunción constitucional consagrada en el **artículo 83** de la **Carta Política** según la cual *“las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”* la entidad requería verificar la veracidad del contenido; debió adelantar los trámites administrativos necesarios en vez de negar de manera reiterada el derecho a la prestación económica a partir de la fecha de estructuración.

Se propuso por COLPENSIONES la excepción de **PRESCRIPCIÓN** que tampoco prospera, siendo los actos administrativos del **año 2017** (Resolución SUB 56315 del 09 de mayo de 2017¹⁸, Resolución SUB 137107 del 23 de mayo de 2018¹⁹ y

¹⁸ Carpeta “01PrimeraInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **págs. 22 a 28**”

¹⁹ Carpeta “01PrimeraInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **págs. 33 a 38**”

Resolución DIR 13206 del 18 de julio del 2018²⁰⁾ y la demanda instaurada el **13 de agosto de 2019**²¹. Finalmente, se verifica por la Sala que el valor objeto de condena se encuentra ajustado a derecho de conformidad con el siguiente detalle:

RETROACTIVO PENSIONAL Rdo. 018 2019 00472				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2014	3,66%	4,43	\$ 616.000	\$ 2.728.880
2015	6,77%	13	\$ 644.350	\$ 8.376.550
2016	5,75%	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	4,09%	4	\$ 737.717	\$ 2.950.868
2018	3,18%		\$ 781.242	\$ -
2019	3,80%		\$ 828.116	\$ -
2020	1,61%		\$ 877.803	\$ -
2021	5,62%		\$ 908.526	\$ -
2022	13,12%		\$ 1.000.000	\$ -
2023			\$ 1.160.000	\$ -
			TOTAL	\$ 23.019.200

La **entidad descontará** del valor del retroactivo pensional ordenado los aportes en salud, descuento que opera por mandato legal (**SL 1169 de 2019**, **SL1019-2020** y **SL4339-2022**).

8. LA CONDENA A INTERESES MORATORIOS SOBRE EL RETROACTIVO RECONOCIDO POR LA ENTIDAD

La Juez condenó a COLPENSIONES de los **intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993** sobre el retroactivo pensional que fue reconocido a la señora MARIA MARLENY MUÑETON SANTA a partir del **26 de agosto de 2016** partiendo de la solicitud radicada el **25 de abril de 2016**²².

La apoderada de la pasiva en el recurso de apelación como en los alegatos solicita se *revoque* la decisión insistiendo en que no se trató de un actuar caprichoso de la entidad, insistiendo en la autenticidad del documento allegado en el trámite administrativo y que el derecho solo se acreditó con la certificación allegada por la EPS SURA directamente al proceso.

²⁰ Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **págs. 50 a 54**”

²¹ Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **pág. 11**”

²² Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “01ExpedienteDigitalizado, **pág. 22**”

Esta corporación no comparte en manera alguna tales argumentos por lo siguiente: **i)** Sea lo primero indicar que conforme a lo definido en la sentencia **C-601 de 2000** así como en providencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (**SL1681-2020, SL3130-2020, SL4335-2022 y SL3003-2022**), la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones. **ii)** Al ser su naturaleza **simplemente resarcitoria** y no sancionatoria²³ no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la *mora* en el pago efectivo de la obligación²⁴. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas, pero **no es éste el caso que aquí se presenta**. **iii)** Se ha analizado en el acápite precedente que la entidad tenía en su poder desde el comienzo del análisis del derecho pensional un certificado de la EPS emitido el **1 de abril de 2016** habiéndose allegado otro del **17 de enero de 2018**, resultando claramente injustificada la negativa al reconocimiento de la prestación bajo los postulados constitucionales consagrados en los artículos 48 y 53 de la Carta Política que imponían a COLPENSIONES verificar la veracidad de su contenido si es que aquellos le merecían duda, debiendo adelantar los trámites administrativos necesarios para así reconocer la prestación a partir de la fecha de estructuración de la invalidez en los términos que define el legislador.

Y se encuentra ajustada a derecho la fecha de causación, porque habiéndose solicitado la pensión **25 de abril de 2016**, los intereses se causan a partir del **26 de agosto** de dicho año y hasta que se verifique el pago del retroactivo objeto de condena en este proceso.

9. SOBRE LAS COSTAS

²³ CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras

²⁴ sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892,

Al no salir adelante el recurso de apelación de COLPENSIONES, se le CONDENA en COSTAS en segunda instancia. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de \$1'160.000.

10. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

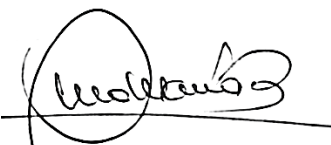
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES al pago de las costas en segunda instancia. El valor de las agencias en segunda es de **\$1.160.000.**

Lo anterior se notifica por **EDICTO**, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 05001 31 05 018 2019 00472 01

SENTENCIA del //10/02/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EjruXFQqMuNLMkiB8cEFMe0BYtUBXunz-buZIH2WW4s3QQ?e=a6Lohm